

BRASIL



“

VIVIMOS UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SISTÉMICA Y RECURRENTE. LA IMPUNIDAD DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS GARANTIZA LA EFICACIA DE LA REPRESIÓN Y AUMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS Y GRUPOS AMENAZADOS Y ASESINADOS

”

GRUPO DE ACCIÓN URGENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE BRASIL

EN BRASIL HA RESURGIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS y sus defensores/as así como una disminución de la protección de los derechos humanos por parte del Estado. La policía utiliza una fuerza excesiva, particularmente durante las protestas. Los jóvenes y los negros, especialmente los que viven en las *favelas* y otras comunidades marginadas, así como las personas que defienden sus derechos, son claramente el blanco de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Por otro lado, los/as DDH, particularmente las personas que defienden el derecho a la tierra y al medio ambiente, o los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo quilombola (afrodescendientes), se enfrentan a unas amenazas y ataques cada vez mayores. Asimismo, existe una violencia generalizada contra las mujeres y niñas. Sin embargo, tanto la sociedad civil como el Gobierno ignoran en gran medida los riesgos específicos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos y la discriminación contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes se han intensificado, creando un clima de hostilidad hacia el trabajo de los/as DDH.¹⁷ Dado el aumento de los niveles de violencia contra los/as DDH y el desmantelamiento sistemático de los sistemas estatales de protección¹⁸ de los derechos humanos, ahora más que nunca es necesario fortalecer las luchas de los movimientos sociales, activistas, pueblos y comunidades indígenas para conseguir la protección de sus derechos. Para ello, será necesario priorizar la implementación de una estrategia efectiva de protección de los/as DDH.

La situación de los/as DDH en Brasil está estrechamente vinculada a la crisis política y económica en el país. La economía ha sufrido una enorme recesión, con un ingreso real per cápita del 9% entre 2013 y 2016; el crecimiento es estructuralmente muy lento, la posición fiscal es insostenible y un escándalo de corrupción¹⁹ ha envuelto a la élite política y a los principales empresarios. Según las predicciones basadas en los datos del Banco Mundial, Brasil será la economía más débil de la región en 2019.²⁰ Por otra parte, la Corte Suprema ha autorizado las

investigaciones de un tercio de los miembros actuales del gabinete, un tercio de los senadores y un tercio de los gobernadores estatales, así como del presidente, de los líderes del Congreso y de los principales partidos políticos.²¹ Tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, las élites políticas y económicas están aún más decididas a avanzar en proyectos basados en la extracción y explotación de los recursos naturales y humanos de Brasil como solución a sus problemas económicos. El Gobierno y sus aliados en el Congreso perciben cualquier intento de proteger el medio

ambiente, los derechos de los pueblos indígenas o las comunidades campesinas como una amenaza a sus intereses económicos. Sin embargo, sorprendentemente, el Gobierno brasileño anunció oficialmente que pondría fin a su anterior política de construcción de megarepresas, que incluía la construcción de varias de ellas en la región amazónica. Esto podría eliminar lo que supone una gran amenaza para los medios de vida de los pueblos indígenas en la región.²² La crisis política, además de crear inestabilidad, ha contribuido a intensificar las expresiones de odio hacia los/as DDH y los ataques hacia estas personas. A pesar de los enormes esfuerzos realizados en los últimos años por documentar todos los ataques, aún no se ha logrado. Esto se debe a varios factores que complican la situación, entre ellos: las dimensiones del país, el número de casos y la dificultad para acceder a información precisa desde áreas remotas.

En 2016, el Centro de Documentación Dom Tomás Balduino –CPT²³ (creado por la Comissão Pastoral da Terra/Comisión Pastoral de la Tierra para recopilar y analizar información sobre violaciones de derechos humanos en áreas rurales) documentó el mayor número de conflictos que se habían producido en áreas rurales en los últimos 32 años. Se registraron 1.079, con un promedio de 2,9 incidentes al día. Además, el número de asesinatos de activistas en áreas rurales aumentó en un 22% en comparación con 2015 y supuso el mayor número de casos desde 2003.²⁴ El informe, *Vidas em Luta: Criminalização e Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil*²⁵ publicado en 2016 por el Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos²⁶ (CBDDH) basado en los datos de un informe del CEDOC Dom Tomás Balduino –CPT, documentó el asesinato de 66 DDH en 2016. En su Informe Anual de 2017, publicado en enero de 2018, Front Line Defenders informó del asesinato de 65 DDH en Brasil.²⁷ Las cifras revisadas de 2017, publicadas en abril de 2018 por CEDOC Dom Tomás Balduino –CPT reflejan que este dramático aumento continúa, ya que se han registrado 70 asesinatos, lo que implica un aumento del 15%, incluso más que en 2016.²⁸ Algo que ha supuesto un gran cambio en 2017 ha sido el aumento del número de masacres.²⁹ De los 70 asesinatos registrados en 2017, 28 o 40% se produjeron en el contexto de una masacre.³⁰

ESTA SITUACIÓN SE HA VISTO AGRAVADA POR EL HECHO DE QUE LAS PERSONAS EN EL PODER SE CENTRAN EN PROTEGER SUS PROPIOS INTERESES ASÍ COMO LOS DE GRANDES TERRATENIENTES Y EMPRESAS TRANSNACIONALES REFORZADAS POR LA INFLUENCIA DE LOS MILITARES Y LA PERSISTENTE DESIGUALDAD SOCIAL, ÉTNICA RACIAL Y DE GÉNERO

Esta situación se ha visto agravada por el hecho de que las personas en el poder se centran en proteger sus propios intereses así como los de grandes terratenientes y empresas transnacionales reforzadas por la influencia de los militares y la persistente desigualdad social, étnica racial y de género. Hasta que no se produzcan avances para abordar las causas sistémicas de la injusticia, los ataques diarios contra DDH y las violaciones de derechos humanos continuarán produciéndose. A pesar de que la mayoría de los asesinatos en el país están relacionados con la defensa del derecho a la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, esta violencia se ha extendido más allá de estos sectores e incluye violaciones en áreas urbanas, por ejemplo, contra los/as DDH que trabajan en las *favelas* de Río de Janeiro o grupos de activistas LGBTI en Curitiba. El modelo económico brasileño se basa principalmente en el desarrollo de megaproyectos tales como represas y planes hidroeléctricos con un enorme impacto en las vidas de los pueblos indígenas. La decisión de poner fin al desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas en la cuenca del Amazonas es un avance muy positivo. Además, estos proyectos deberían desarrollarse bajo la supervisión de organismos estatales adecuados. Sin embargo, esta falta de supervisión da lugar a irregularidades en la planificación y financiación debido a la falta de medición del impacto social y ambiental de estos proyectos. Este modelo de «desarrollo a cualquier precio»³¹ basado en la explotación despiadada de los recursos naturales del país, es discriminatorio *per se*, ya que prioriza los beneficios económicos a corto plazo para unos pocos sobre el acceso a los derechos para la mayoría de la población brasileña.

ATAQUES CONTRA TRABAJADORES/AS RURALES

Los grandes terratenientes poseen alrededor del 45% de las tierras de Brasil,³² mientras que los pequeños agricultores poseen solo el 2,3%. Esta concentración de recursos en manos de unos pocos ricos tiene su origen en la historia de esclavitud del país y los asesinatos en masa de los pueblos indígenas. Hoy, el resultado se traduce en una tensión crónica entre quienes poseen tierras y quienes no.³³ Esto ha dado lugar a una situación de violencia tristemente predecible que empeora cada vez más y que está afectando las vidas de quienes defienden los derechos humanos en Brasil.³⁴ Las familias que viven en tierras que están siendo reasentadas en el marco del programa de la reforma agraria viven bajo el temor de ataques constantes, que van desde amenazas de muerte, torturas, detenciones en cautiverio, incendios de casas, destrucción de vallas, envenenamiento mediante la fumigación aérea de pesticidas y disparos contra casas y vehículos. Según el informe de 2017 de Global Witness,³⁵ 46 defensores/as del derecho a la tierra y el medio ambiente fueron víctimas de asesinato en Brasil en 2017.³⁶ La mayoría de estos casos no se han investigado adecuadamente y las personas responsables no han comparecido ante la justicia.

El Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos³⁷ considera que es de vital importancia contar con un sistema de alerta temprana para detectar los conflictos graves a medida que se producen. Esto permitiría al Gobierno intervenir de forma preventiva para evitar que empeore la situación de las violaciones de derechos humanos, y el aumento del número de asesinatos múltiples. A pesar de que el Estado es completamente responsable de la protección

SI BIEN TRAS LA ADOPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE 1988 ENTRARON EN VIGOR VARIAS LEYES QUE PROTEGÍAN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EL HECHO ES QUE MÁS DE 25 AÑOS MÁS TARDE, AÚN QUEDA MUCHO PARA HACER EFECTIVOS ESTOS DERECHOS

MARIA TRINDADE DA SILVA COSTA



Maria Trindade da Silva Costa era una lideresa quilombola (afrodescendiente) de la comunidad de Santana do Baixo Jambuaçu en Moju, estado de Pará. El 23 de junio de 2017, fue en bicicleta a visitar a unos amigos en la zona. Su cadáver fue hallado al día siguiente. Había sido brutalmente golpeada y su cuerpo mostraba signos de agresión sexual. Según sus familiares, Doña Trindade, como se la conocía, era popular en el área y conocida por su trabajo como lideresa comunitaria y una respetada defensora de los derechos de los quilombolas. También era integrante

activa de una iglesia local. La brutalidad y la naturaleza sexual del ataque puso de relieve una vez más el doble impacto del racismo y la discriminación de género al que se enfrentan las mujeres negras en Brasil, especialmente la vulnerabilidad de mujeres como Doña Trindade que hacen campaña por los derechos de los quilombolas.

FLÁVIO GABRIEL PACÍFICO DOS SANTOS



El 19 de septiembre de 2017, el líder quilombola (afrodescendiente), Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, de 38 años, conocido por todos como «Binho do Quilombo», fue asesinado de al menos diez disparos en la ciudad de Simões Filho. Binho do Quilombo era hijo de la exsecretaria para la Promoción de la Igualdad Racial en el municipio, María Bernadete Pacífico. Acababa de dejar a su hijo en la escuela y se dirigía en coche hacia el funeral de un amigo cuando un automóvil blanco se detuvo y dos hombres abrieron fuego. Binho do Quilombo era un

respetado defensor de los derechos de los quilombolas en la zona de Pitanga de Palmares. También se presentó como candidato en las elecciones municipales de 2012 y 2016.

de los/as DDH, en muchos casos, la policía o los miembros de las fuerzas de seguridad están implicados en los asesinatos. Es evidente que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los/as DDH, pero también de llevar a cabo acciones efectivas contra las personas responsables integrantes de la policía y los cuerpos de seguridad. Según los datos del CEDOC Dom Tomás Balduino -CPT, en 2015 se produjeron 50 muertes, 144 personas fueron amenazadas y hubo 59 intentos de asesinato en zonas rurales. El 90% de estos casos se registraron en los estados de Pará, Maranhão y Rondônia. En 2016, las regiones del norte y noreste fueron las más peligrosas para los/as DDH, donde se registraron la mayoría de los asesinatos, con 56 muertes.³⁸ Desde 2017, el patrón de los asesinatos ha pasado de ser ataques individuales a brutales ataques a comunidades caracterizados por una extrema crueldad.³⁹ En mayo de 2017, diez defensores/as del derecho a la tierra fueron asesinados/as a tiros por la policía en Pau D'arco. Seis semanas después, un testigo de los hechos que se había escondido también fue asesinado.

PUEBLOS INDÍGENAS Y QUILOMBOLAS

Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales son sistemáticamente marginados en la sociedad brasileña. Sus tierras y territorios son usurpados por traficantes de tierras, agricultores y por el propio Estado. Si bien tras la adopción de la Constitución de 1988 entraron en vigor varias leyes que protegían los derechos de los pueblos indígenas, el hecho es que más de 25 años más tarde, aún queda mucho para hacer efectivos estos derechos, especialmente en lo que se refiere al acceso a la tierra y a su recuperación. «La incertidumbre judicial generada por la falta de reconocimiento territorial exacerba estos conflictos así como la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas comunidades cuando tratan con actores que tienen intereses económicos sobre esos territorios».⁴⁰ Incluso el escaso progreso logrado hasta la fecha se ve amenazado por las propuestas del Gobierno de reducir la cantidad de tierras indígenas y socavar el trabajo de FUNAI⁴¹ e INCRA⁴² (los organismos responsables de proteger los derechos de los pueblos indígenas) para demarcar las tierras indígenas y otorgar su titularidad. En mayo de 2017, se aprobó el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre FUNAI e INCRA. En él se exigía de forma preocupante la acusación de 67 personas, entre ellos líderes indígenas y antropólogos/as. Esta criminalización y desarticulación del trabajo de INCRA y FUNAI es especialmente preocupante, ya que responde principalmente a los intereses de los terratenientes de la bancada «ruralista»⁴³ en el Congreso Nacional, cuyo objetivo es acceder a amplias extensiones de tierra pertenecientes a los pueblos indígenas. Para este grupo, el trabajo de estas organizaciones y el proceso de reforma agraria suponen una amenaza a sus intereses económicos.

El informe CPI⁴⁴ alegó que FUNAI e INCRA estaban involucradas en casos de corrupción y que eran innecesariamente beligerantes. Sin embargo, omitió cualquier referencia al aumento de los conflictos por la tierra en los últimos años, así como los incidentes de asesinatos de líderes indígenas, quilombolas y de las personas que abogan por la redistribución de la tierra.

Desde 2015 se ha producido un aumento constante

LA VIOLENCIA Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA LOS/AS DDH QUE TIENEN LUGAR EN LAS CIUDADES AFECTAN PARTICULARMENTE A AQUELLAS PERSONAS QUE DEFIENDEN EL DERECHO A LA VIVIENDA, LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGBTI, TRABAJADORAS SEXUALES, JÓVENES NEGROS/AS, LÍDERES COMUNITARIOS, TRABAJADORES/AS COMUNITARIOS/AS EN LAS FAVELAS Y ESTUDIANTES

JANE JÚLIA DE ALMEIDA



El 24 de mayo de 2017, diez trabajadores rurales fueron asesinados en el municipio de Pau d'Arco, en el estado de Pará, durante una operación llevada a cabo de forma conjunta por la policía militar y civil. La acción tuvo lugar en la hacienda de Santa Lúcia, que una vez más había sido ocupado por las personas sin tierra. Las familias luchan por que se redistribuya la tierra en el marco del programa de la reforma agraria. Entre las personas asesinadas estaba Jane Júlia de Almeida, lideresa del campamento, la única mujer asesinada ese día. Jane Júlia de Almeida sugirió que el grupo se quedara

donde estaba. Creía que la policía no los buscaría bajo la lluvia, pero estaba equivocada. Según un testigo, «cuando el grupo se paró bajo una lona, esperando que dejara de llover, la policía llegó disparando mientras corrían y gritaban que iban a morir todos. Me escapé pero ella se sentó allí. No sé si la mataron sentada, solo recuerdo que le decían: levántate para morir vieja bastarda, vieja zorra, puta. Luego sonrieron y le dispararon.»

MARINALVA MANOEL



Marinalva Manoel vivía en Ñu Verá, una comunidad de 28 familias Guarani-Kaiowá que luchan para que se les reconozca que la tierra en la que viven y trabajan les pertenece. La comunidad reclama un área de 1.500 acres. A pesar de que el proceso legal está en una etapa avanzada, se encuentran bajo una gran presión por parte de los terratenientes locales que se oponen a sus demandas y también de los constructores, que quieren el terreno para construir viviendas, por su cercanía con la ciudad. Marinalva formaba parte del Grande Conselho Guarani-Kaiowáda Aty Guassu de los Guarani-Kaiowá. Dos semanas antes de ser

asesinada, Marinalva había ido a Brasilia como parte de una delegación de líderes en representación de los pueblos indígenas. Habían acampado delante de la Corte Suprema para protestar contra una propuesta para revocar la decisión de otorgar la tierra a los guaraníes-kaiowá. Marinalva había hablado muchas veces sobre el reciente aumento de las amenazas por parte de los terratenientes locales o las personas que trabajaban para ellos. En la mañana del 1 de noviembre de 2014, el cuerpo de Marinalva fue encontrado al lado de la carretera con múltiples heridas de arma blanca.

de la violencia contra los integrantes de las comunidades quilombolas. Según organizaciones brasileñas de la sociedad civil, 14 miembros de estas comunidades fueron asesinados en 2017. La violencia contra los pueblos indígenas en el estado de Maranhão, hogar del pueblo gamela, refleja la crisis a la que se enfrentan estos pueblos en todo el país. Actualmente, unas 376 comunidades en el estado de Maranhão son objeto de violencia y conflictos rurales. Solo en 2016, se denunciaron 196 incidentes de violencia contra comunidades rurales. Maranhão fue el estado con el mayor número de personas indígenas asesinadas en 2016. Ese mismo año, el Conselho Indigenista Missionário (Consejo Indígena Misionero - CIMI) denunció varios ataques por parte de paramilitares organizados por terratenientes contra líderes del pueblo guaraní-kaiowá en Mato Grosso do Sul. Uno de esos ataques resultó en la muerte de Clodiody Aquileu.⁴⁵ La grabación mostraba a varios hombres armados prendiendo fuego a viviendas en un episodio brutal que, además de acabar con la vida de un indígena, dejó a otros seis heridos, entre ellos un niño. El grupo étnico guaraní-kaiowá está compuesto por aproximadamente 60.000 personas que viven en más de 50 comunidades. Aunque el caso de Mato Grosso do Sul es particularmente grave, existe un claro patrón de abuso y violencia contra los/as DDH indígenas en todo Brasil.

En Bahía, el pueblo indígena tupinambá también se enfrenta a todo tipo de prejuicios y violencia física y cultural. Las amenazas de muerte son constantes y sus líderes son perseguidos/as, atacados/as y encarcelados/as. El hecho de que el Estado no reconozca o aborde el tema de los ataques contra los pueblos indígenas y quilombolas y sus líderes, indica que existe el riesgo real de que sean marginados con el objetivo de apropiarse de sus tierras y explotar los recursos naturales que se encuentran en ellas. Esta realidad de casi total impunidad implica que los/as defensores/as de los derechos indígenas y los líderes comunitarios pueden ser sistemáticamente eliminados/as como estrategia para aterrorizar a toda la comunidad. Los pueblos indígenas de Brasil y sus líderes están actualmente en el momento de mayor riesgo de toda su historia reciente.⁴⁶

VIOLENCIA EN CONTEXTOS URBANOS

La violencia y criminalización contra los/as DDH que tienen lugar en las ciudades afectan particularmente a aquellas personas que defienden el derecho a la vivienda, los derechos de la comunidad LGBTI, trabajadoras sexuales, jóvenes negros/as, líderes comunitarios, trabajadores/as comunitarios/as en las *favelas* y estudiantes. Las ciudades brasileñas están experimentando una oleada de violencia brutal que se ejerce, entre otros, a través de la violencia estatal, particularmente por parte de la policía, y de ataques de grupos extremistas y milicias financiados por grandes empresas, así como una violencia indiscriminada resultado de las disputas territoriales entre pandillas. En este contexto, los asesinatos de mujeres

o activistas que trabajan con grupos callejeros y personas en prisión son calificados como «violencia urbana» o se incluyen en las estadísticas de la «guerra contra las drogas». Además, muchas personas han resultado heridas e incluso han sido asesinadas durante los desalojos forzados. Por ejemplo, en mayo de 2017, durante un desalojo forzoso en la *favela* de Belo Horizonte, un activista urbano de 14 años recibió un disparo en la boca a una distancia de menos de 1,5 metros.

En Río de Janeiro, activistas de las *favelas* y habitantes de las chabolas que luchan contra la violencia institucional han sido sistemáticamente intimidados y amenazados por agentes

militares y de la policía.⁴⁷ Los informes describen escuchas telefónicas ilegales, secuestros selectivos, redadas en hogares, acoso sexual, violaciones e incluso disparos contra DDH. Entre enero y julio de 2017, 642 personas fueron asesinadas como resultado de las operaciones policiales en Río de Janeiro. Según la ONG brasileña Justiça Global, a finales de 2017 se habían producido 1.124 asesinatos a manos de la policía, pasando a ser el año más mortal de la historia.⁴⁸ La mayoría de estas muertes fueron ejecuciones sumarias de jóvenes negros. Sin embargo, la policía alegó que fueron tiroteos en defensa propia. El año 2018 no pinta mucho mejor: once días después del asesinato de la concejala y defensora de derechos humanos de Río, Marielle Franco, al menos 8 personas fueron asesinadas. Se alegó que este hecho se había producido como una venganza de la policía tras la muerte de un agente.⁴⁹ La impunidad que sobrevuela estos asesinatos a manos de la policía alimenta el ciclo de violencia policial en Río de Janeiro. Esta situación envía el mensaje de que las autoridades toleran el comportamiento ilegal de la policía y que los agentes implicados en los casos de ejecuciones extrajudiciales saben que nunca serán juzgados por ello.

SITUACIÓN DE LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

A la hora de analizar los problemas de la violencia y criminalización, es importante tener en cuenta las cuestiones de género, raza, orientación sexual e identidad de género en términos de cómo identificamos las diversas categorías de las personas responsables de los crímenes y la forma en que se criminalizan las luchas individuales. El hecho de que la gran mayoría de DDH asesinados/as en Brasil sean hombres es un reflejo de la marginación de las mujeres tanto en la sociedad como dentro del movimiento de derechos humanos. Es evidente que estas experimentan a menudo violencia dentro de sus familias y en su círculo más cercano, lo que les impide continuar con su labor de defensa de derechos humanos. Asimismo, hay informes sobre las dificultades que experimentan las organizaciones de mujeres dentro de los movimientos sociales como consecuencia de la violencia de género. Son varias las razones que explican por qué es tan difícil para ellas ocupar estos espacios políticos dentro de los movimientos sociales, entre ellos por la división del trabajo en base al género, lo que supone una triple carga para las mujeres. Cuando luchan públicamente por sus derechos, sufren violencia dentro y fuera del hogar. El racismo y la violencia sexual contra las mujeres negras las hacen aún más vulnerables. Tanto los debates como la literatura sobre el trabajo de los/as DDH siguen sin abordar la mayoría de estos problemas.

SE LLEVARON LA VIDA DE FRANCISCA POR SER DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS Y FUE VIOLADA PARA MOSTRAR QUE ELLA, COMO MUJER Y COMO MUJER NEGRA, NO DEBERÍA ATREVERSE A OCUPAR ESE ESPACIO DE LIDERAZGO



Marinete da Silva sostiene un retrato de su hija Marielle Franco, defensora de derechos humanos brasileña asesinada

Esta invisibilidad implica que gran parte de los ataques contra las defensoras de derechos humanos no se registran o se atribuye dicha violencia a otras causas, tales como la violencia doméstica. La muerte de la defensora Francisca Chagas da Silva, quilombola de la comunidad de Joaquim Maria Maranhão y lideresa de la Unión de Obreros y Trabajadores del Campo de Miranda do Norte ilustra las formas específicas de ataques contra las mujeres. El cuerpo de Francisca fue hallado desnudo en un charco de lodo y mostraba signos de violación, estrangulación y apuñalamiento. Según el Comité Brasileño de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, «se llevaron la vida de Francisca por ser defensora de derechos humanos y fue violada para mostrar que ella, como mujer y como mujer negra, no debería atreverse a ocupar ese espacio de liderazgo».⁵⁰

ASESINATOS DE PERSONAS LGBTI

El número de asesinatos de personas LGBTI en Brasil siempre es elevado. Según informes del Grupo Gay de Bahía,⁵¹ 343 miembros de la comunidad LGBTI fueron asesinados/as en Brasil en 2016⁵² y otros 445 en 2017.⁵³ De acuerdo con algunos informes,⁵⁴ una persona LGBTI es asesinada en Brasil cada 28 horas, siendo las transexuales y travestis las que cuentan con los índices más altos.⁵⁵ En las redes sociales se producen amenazas constantes contra los líderes LGBTI y sus eventos. Por ejemplo, en 2015 se celebró un evento llamado *Dezembrada* en Curitiba con el objetivo de crear un Frente Nacionalista de derechas con una agenda abiertamente antigay.⁵⁶ Acontecimientos como estos ilustran cómo algunos grupos, empeñados en cometer crímenes contra las personas LGBTI, se están fortaleciendo y mejorando su organización. Desde 2005, los/as defensores/as LGBTI han sufrido amenazas y persecuciones en Curitiba. Esta situación se agravó después de que se entregara un dossier a las autoridades policiales con serias denuncias contra *skinheads*, lo que dio lugar a la detención de un grupo de neonazis. Al año siguiente, los defensores LGBTI Igo Martini y Márcio Marins fueron agredidos físicamente por tres hombres,⁵⁷ en represalia por su participación en el caso.

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

En lugar de tomar medidas para defender los derechos humanos y proteger a los/as DDH, el Estado se ha dedicado a socavar los mecanismos de protección existentes, criminalizar la protesta social y difamar a los/as DDH. Incluso el programa oficial del Estado de protección de los/as DDH *Programa de Proteção às Defensoras e Defensores de Direitos Humanos* ha perdido su eficacia en gran medida por la falta de apoyo político, de un marco legal y por la retención de los recursos económicos. Creado en 2005, el Programa de Protección se instauró en nueve estados brasileños: Minas Gerais, Espírito Santo, Río de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Bahía, Río Grande do Sul, Maranhão y Pará. Para junio de 2017, solo siguió existiendo en los estados de Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco y Ceará. Las políticas de protección deberían y podrían desempeñar un papel importante en la protección de los/as DDH. Sin embargo, es necesario que los estados implementen políticas ideadas adecuadamente y con recursos con el objetivo de evitar las violaciones de derechos humanos y garantizar los derechos.

Según el Grupo de Acción Urgente del Consejo Nacional de Derechos Humanos «vivimos en una situación de violencia sistémica y recurrente». La impunidad de las violaciones de derechos humanos garantiza la efectividad de la represión y aumenta el número de personas y grupos amenazados y asesinados.⁵⁸ El sistema de justicia penal ha intensificado su represión contra los/as DDH a través de leyes como la Ley de Organizaciones Criminales⁵⁹ y la Ley de Seguridad Nacional.⁶⁰ La nueva legislación antiterrorista⁶¹ se utiliza cada vez más para atacar a movimientos sociales como el MST,⁶² el movimiento de trabajadores sin tierra. En 2016, se procesó a 64 organizaciones que realizaban campañas contra megaproyectos de desarrollo.⁶³ Los/as defensores/as de derechos humanos han sido sistemáticamente objeto de calumnias por parte de políticos, empresarios y líderes religiosos, quienes los han calificado de personas «malas» o «moralmente corruptas» que «merecen» cualquier cosa que les suceda. Este tipo de discurso, especialmente visible en las plataformas online, amplía el espacio para que se produzcan estos ataques violentos.

QUÉ SE DEBE HACER

La cuestión clave que vincula todas estas luchas individuales es el hecho de que el Gobierno brasileño ha hecho la vista gorda a una crisis de derechos humanos que se agudiza por su propia gestión. Lo que vemos hoy es que la actual crisis política, ética y económica de Brasil está siendo utilizada como excusa para pisotear unos derechos humanos bien establecidos. El número de asesinatos y ataques contra DDH ilustra la falta de voluntad política por parte del Gobierno para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales. Las llamadas «reformas» aprobadas por el presidente Temer han tenido un efecto devastador en la protección de los derechos humanos en Brasil. El Ministerio de Derechos Humanos ya no existe como entidad independiente. El Ministerio de Igualdad Racial, Mujer y Derechos Humanos fue absorbido por el Ministerio de Justicia, bajo la autoridad de un secretario de Estado, mientras que el Programa Nacional para la Protección de los/as Defensores/as de Derechos Humanos carece de recursos para brindar una protección adecuada a los/as DDH en riesgo. Además, el Estado brasileño es el principal responsable de la protección de estas personas, una situación que deberá resolver urgentemente o los asesinatos continuarán produciéndose sin cesar.

RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO DE BRASIL

El Gobierno de Brasil debería:

- ❖ Tomar medidas inmediatas para garantizar la implementación plena y efectiva del Programa Nacional de Protección de Defensores/as de Derechos Humanos;
- ❖ Crear un marco legal claro dotado de recursos económicos adecuados para garantizar la implementación efectiva del programa;
- ❖ Garantizar la documentación e investigación efectivas de los ataques a DDH;
- ❖ Desarrollar una metodología para abordar los riesgos específicos a los que se enfrentan los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTI;
- ❖ Coordinar e integrar las actividades de todos los sectores de la justicia y los sistemas de seguridad pública involucrados en la protección de los/as DDH;⁶⁴
- ❖ Priorizar estrategias específicas para superar los graves desafíos estructurales a los que se enfrentan las comunidades más vulnerables del país;
- ❖ Dar marcha atrás en sus políticas de debilitamiento de organismos públicos como FUNAI y el INCRA, cuya responsabilidad principal es proteger los derechos indígenas y la reforma agraria;
- ❖ Garantizar que FUNAI y el INCRA cuenten con el apoyo político y los recursos económicos necesarios para llevar a cabo su trabajo.